

Si bien se trata de un conflicto entre privados, la importancia estratégica de los granos en la dieta básica de los chilenos exige un rol más activo del estado desde la perspectiva de la soberanía y la seguridad alimentaria. No se trata de ser proteccionistas o de fijar precios, sino de reducir los desincentivos a la producción de trigo, de investigar y combatir eventuales vulneraciones a la libre competencia y de fomentar el logro de acuerdos concretos entre los actores de la cadena que favorezcan a todos, incluidos los consumidores.